

Soberanía y democracia

Los temas críticos del momento en el país son soberanía y democracia. El gobierno de Uribe los ha puesto en el primer lugar de la agenda de los colombianos, no precisamente porque hayan sido sus banderas, sino porque el mismo mandatario en forma creciente y acelerada, debilita estas áreas vitales, cuya defensa debería ser brújula de cualquier gobierno comprometido con el progreso nacional.

La democracia recibe todos los días nuevos golpes. El referendo disminuye el tamaño del Congreso, volviendo prácticamente imposible la participación de las minorías en las corporaciones públicas, cuyo juego político ya había sido drásticamente reducido por la reforma política aprobada por el Congreso. Asimismo, el referendo, en cuya promoción el Ejecutivo gasta multimillonarios recursos, además de estrechar o anular los ya limitados alcances de la democracia colombiana, elimina los organismos de control, centralizándolos en la Contraloría General. Por su parte, la proyectada reforma a la justicia restringe el alcance de la tutela, disminuye autonomía a la rama judicial y las funciones de la Corte Constitucional, volviendo inviable cualquier apelación de los ciudadanos a la preservación de sus derechos fundamentales. Propuestas como las de aprobar la reelección de Uribe, los intentos de amordazar la oposición en el Senado, restringiendo el tiempo para los debates y la monopolización por parte del uribismo de las mesas directivas del Congreso son otros signos evidentes de la arrogancia y prepotencia del Ejecutivo.

Uribe Vélez se obstina en crear un clima político que algunos han llamado de unanimismo. Descalificar despectivamente a los opositores de cualquier política gubernamental es tarea que realizan cotidianamente el ministro Londoño Hoyos y el asesor presidencial Rudolf Hommes. La protesta popular encuentra cada día más persecuciones: duros golpes fueron asestados al sindicalismo en el caso de la liquidación del Seguro Social y de Telecom y existe un tratamiento despótico contra las demandas de los obreros de Ecopetrol. Todos estos hechos muestran que en Colombia se han recortado, debilitado o negado elementales garantías y antiguos derechos democráticos. La lucha contra el terrorismo, flagelo que tantos males ha traído al país, se ha convertido en una gigantesca campaña para imponer la 'democracia' teledirigida de los 'concejos comunitarios', plataforma circense desde donde se manipulan las encuestas de popularidad en contra de la democracia representativa, el fortalecimiento de los partidos y el respeto a las organizaciones sociales.

Para que no quede duda de la dirección en la que actúa, el gobierno presentó una nueva reforma constitucional en la cual pide facultades para suspender el pago de las participaciones a las entidades territoriales o intervenir su manejo en caso de "mal uso" o "aplicación ineficiente de éstas", aspectos que determinará el Ejecutivo; el mismo proyecto plantea que el retiro de los empleados públicos sea "flexible" y, además, elimina la obligación constitucional de aumentar los recursos de inversión de año en año. Esto significará la autorización constitucional de un manejo discrecional de los dineros de las entidades territoriales, de la planta de personal del Estado y de la definición de inversiones estatales, todo lo cual quedará en manos de la Presidencia.

El otro aspecto polémico del momento es el de la soberanía. El compromiso gubernamental en las negociaciones del ALCA se mantiene, pero hay un creciente énfasis en buscar la firma de un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos. Uno u otro, estos tratados significarían la prolongación indefinida de la ruinoso apertura económica, la renuncia definitiva al fortalecimiento del mercado interno, la aceptación de gravosas normas de propiedad intelectual, el otorgamiento de toda clase de garantías a la inversión extranjera –sin exigirle ninguna contraprestación–, la quiebra de las ramas cardinales de la industria y el agro, así como el abandono definitivo de cualquier papel activo del Estado en la dirección del desarrollo económico de la nación. A pesar de las súplicas del gobierno de Uribe, Estados Unidos exige nuevas concesiones y reformas

En materia de tratamiento a sus vecinos, el gobierno da palos de ciego: ha desechado en la práctica cualquier esfuerzo para revitalizar la Comunidad Andina, procura exacerbar las diferencias con Venezuela, desestima las posibilidades comerciales con los demás países de la región y, al tiempo que considera que Brasil es un competidor temible, subestima la enorme capacidad de la economía más fuerte del mundo –la norteamericana– para asolar nuestro raquítico mercado.

Con el propósito de convencer a la opinión pública, el gobierno anuncia que el crecimiento económico futuro dependerá exclusivamente del acceso al mercado norteamericano. Este acceso, que se tuvo en los últimos 10 años para cerca del 70% del universo arancelario colombiano, determinó un pírrico aumento de las exportaciones que no redundó en un crecimiento significativo de la economía.

La verdad es que durante la pasada década las exportaciones a la Comunidad Andina representaron la mayoría de las exportaciones no tradicionales y nuestro acceso al mercado norteamericano ha estado limitado a productos básicos sin mayor valor agregado. Aún los datos de fuentes gubernamentales indican que el ALCA pondría en grave peligro nuestro acceso a mercados como el venezolano, en el cual tendríamos que competir con Estados Unidos y, en el mejor de los casos, según las cifras amañadas de Planeación Nacional, la economía colombiana sólo crecería menos del uno por ciento mientras que los ingresos del fisco se reducirían en uno por ciento por la disminución de aranceles.

La experiencia internacional, por su parte, ha demostrado que no es lo mismo exportar que crecer. México, con un éxito exportador innegable ha tenido su más baja tasa de crecimiento en 60 años. Y, sin ir más lejos, Estados Unidos depende para su crecimiento básicamente de su mercado interno, su economía entra en convulsiones cuando sus habitantes consumen menos y todos los esfuerzos de reactivación, aún los del neoliberal Bush, se basan en la disminución de la tasa de interés y de los impuestos, el aumento del consumo y demás medidas dirigidas a fortalecer el mercado interno.

Aunque es mejor exportar que no hacerlo, la renuncia a la ampliación del mercado interno, a la industrialización, al desarrollo tecnológico y a la autosuficiencia alimentaria sería lo más nefasto para la economía del país y en ningún caso justifica que nos embarquemos en unos tratados que menguarán por décadas la capacidad productiva y descompondrán aún más la vida social de la nación.

El gobierno ha optado por profundizar una política económica neoliberal, buscando demostrar a Estados Unidos que sí merecemos el acuerdo. No en otro sentido pueden interpretarse medidas como la radicalización del ajuste fiscal, el cierre de Telecom y del Seguro Social, las amenazas sobre

Ecopetrol y la eliminación de conquistas prestacionales y pensionales. El ALCA o, en su defecto, el acuerdo bilateral con Estados Unidos comprometerá aún más la escasa soberanía que le resta al país.

El interés norteamericano en Colombia, más allá del control de una economía en la que ya tiene una fuerte influencia sobre la inversión extranjera y el comercio exterior, es también geopolítico. En un momento de agudización del intervencionismo norteamericano en todo el orbe, no deja de preocupar que en el curso de muy poco tiempo hayan visitado al país el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Richard Myers, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el secretario de Estado Colin Powell y el representante comercial, Robert Zoellick, todos ellos revisando, aconsejando e interviniendo sin tasa ni medida en los asuntos internos del país. Tal intervención resulta mas odiosa cuando estamos lamentando 100 años de la secesión de Panamá, protagonizada por siniestros personajes similares a los que hoy nos visitan tan asiduamente.

El movimiento popular comienza a vislumbrar la gravedad de lo que se ejecuta y de lo que se cocina. Aunque tarde, el sindicalismo realizó un importante Paro Cívico que contó con el refuerzo de la Marcha Agraria sobre Bogotá, organizada por la Asociación Nacional para la Salvación Agropecuaria, logrando congregarse en varias capitales importantes manifestaciones de repudio a las políticas gubernamentales. La coalición de múltiples partidos y organizaciones sociales contra el referendo se mantiene y, a pesar de no contar con recursos como los del Ejecutivo, cuenta a su favor con la complejidad del temario, la heterogeneidad e incoherencia de los temas y la creciente desconfianza de importantes sectores del país en el manejo económico gubernamental. El 25 de octubre la población tendrá oportunidad de manifestar, con su abstención activa en el referendo, su censura contra todas estas políticas de Uribe. El 26 de octubre se realizarán elecciones municipales y departamentales y, a pesar de las restricciones aprobadas en la reforma política, han surgido candidatos independientes que reforzarán las voces de protesta contra el gobierno.